ANÁLISIS DE COYUNTURA
COVID-19 EN AMÉRICA LATINA

RIMISP
Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural

Junio 25, 2020
Análisis n° 07

Conflictos socioambientales del agua y COVID-19

La gestión y disponibilidad del agua es hoy vital para evitar la propagación del virus responsable del COVID-19 y restablecer la salud pública.

La alta y persistente desigualdad en los países latinoamericanos es un obstáculo a su desarrollo como lo han evidenciado diversos estudios y organismos internacionales (Ver más en Rimisp, 2018; CEPAL, 2020). Los costos de las inequidades socioeconómicas, territoriales y de género se recrudecen con los efectos negativos del cambio climático, pues las personas marginadas del desarrollo son las más expuestas, provocando pobreza, migraciones y conflictos, entre otros. En consecuencia, profundizando las brechas en bienestar y goce de derechos. Actualmente, observamos el mismo patrón con la llegada del coronavirus al continente: las poblaciones y territorios rezagados tienen menos herramientas para enfrentar la pandemia y prevenir su propagación. En esta edición de la serie de análisis de coyuntura Rimisp,

Coaliciones con características que habilitan su potencial transformador es una de las variables que inciden en acuerdos de desarrollo territorial en general, y específicamente para el tema de conflictos hídricos.

enfatizamos el rol de las crisis como el COVID-19 en agudizar las tensiones territoriales en torno al agua y el rol de las coaliciones transformadoras en procesos de desarrollo inclusivo y gestión de conflictos en los territorios latinoamericanos. La promoción de coaliciones de esta naturaleza se plantea como un elemento con el potencial de fortalecer la resiliencia ante crisis climáticas y sanitarias como las que estamos viviendo actualmente.

En un primer apartado, se aborda el contexto de desigual acceso al recurso hídrico y al saneamiento con que Latinoamérica está enfrentando el cambio climático.

Una de las condiciones necesarias -pero escasamente dadas- para que las coaliciones alcancen su potencial transformador, es que requieren una distribución de los capitales o poderes.

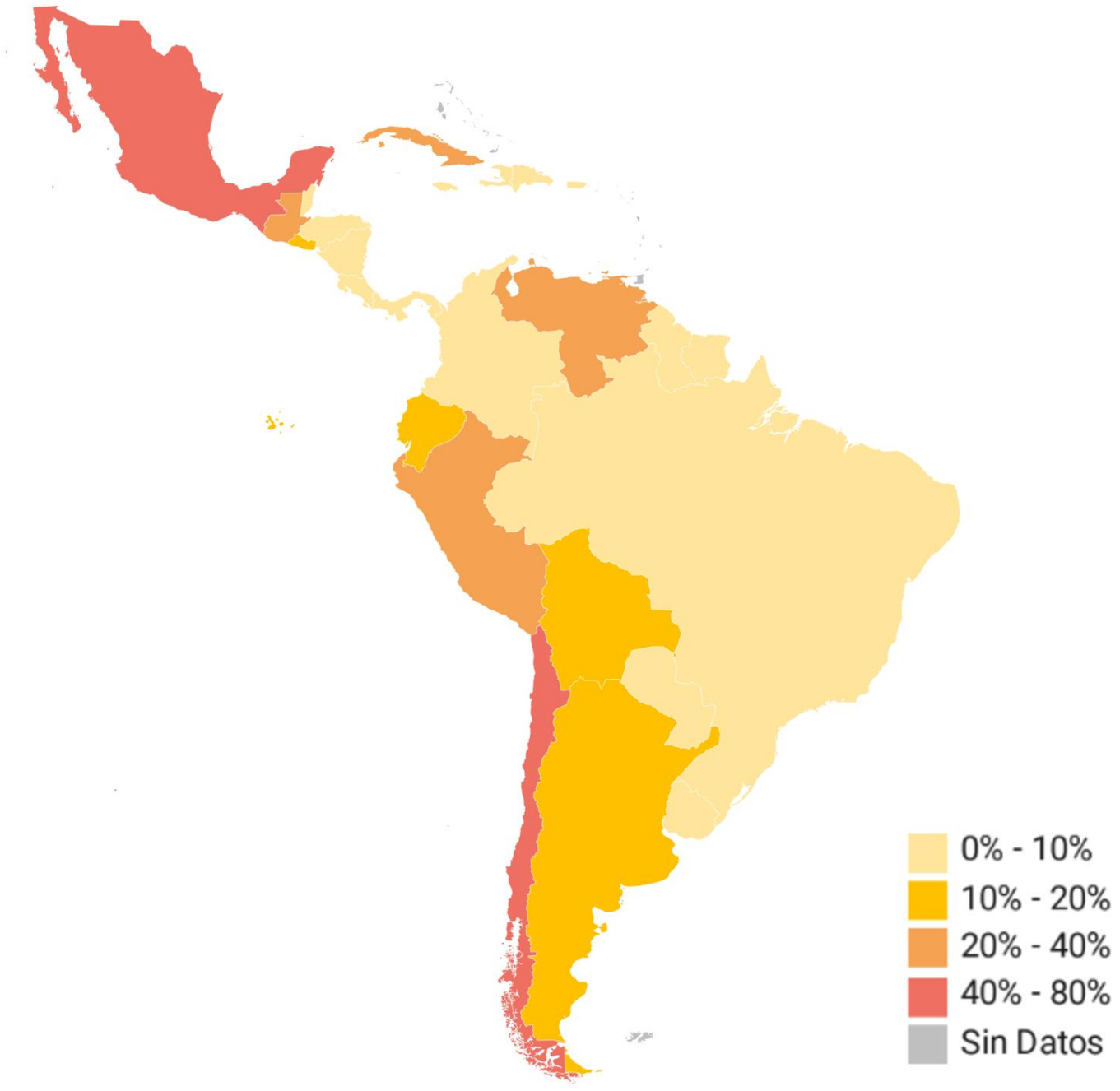
Desigual acceso al agua en el contexto de crisis de COVID-19 y cambio climático

Durante la pandemia del COVID-19 se han propagado los titulares e imágenes indicando que las medidas de distanciamiento social y cuarentenas han contribuido a frenar el impacto del ser humano en el cambio climático. Estas imágenes mostraban, por ejemplo, una disminución en la contaminación de ríos, lagos, y océanos. Sin embargo, estos efectos son temporales, mientras que el cambio climático generará crisis que tendremos que enfrentar por un largo periodo de tiempo. Más aún, el ímpetu que tienen los gobiernos de recuperarse económicamente ha relajado y suspendido algunas regulaciones ambientales (Brunet, 2020; Bond et al., 2020). En la medida que se imponga el objetivo de reactivar la generación de rentas del pasado con energías fósiles que son más baratas, es probable que cualquier avance observado durante estos meses no tan solo retrocederá a los niveles ya vistos de contaminación, sino que debido a la laxitud regulatoria es posible que, en el largo plazo, los impactos se incrementen.

Dentro de las señales más conocidas del cambio climático encontramos el calentamiento de los océanos y de la tierra. Mediciones sobre la temperatura del mar rompen récords cada pocos años. Por ejemplo, el 2019 la temperatura media de los océanos aumentó 1,1 grados Celsius (UN News, 2020a). Estos acontecimientos han desencadenado el descongelamiento de los hielos, el aumento del nivel del mar y mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. Es decir, algunas zonas del globo se ven afectadas por una intensificación de las tormentas e inundaciones y otras zonas sufren de falta de precipitaciones produciendo largas sequías. Todos estos fenómenos añaden presión sobre los países o regiones que sufren de estrés hídrico, entendido como la insuficiencia de proveer recursos hídricos para las necesidades de un país o territorio. Se produce por el deterioro de los recursos de agua dulce en cantidad (por ejemplo, acuíferos sobreexplotados, ríos secos, lagos contaminados) y en la calidad (por ejemplo, eutrofización, contaminación de la materia orgánica, intrusión salina)(EEA, 2020). Estos también afectan a aquellos territorios que tienen falta de acceso o calidad insuficiente de servicios de agua potable o alcantarillado. En América Latina existe una gran variabilidad como se puede observar en la figura 1. Esta muestra el escenario del estrés hídrico en la región.

En el caso de la figura 1, podemos observar que existen países como Chile y México dónde la falta de agua

Figura 1. Estrés hídrico nacional promedio



Mapa: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Fuente: World Resources Institute.

Además de ser clave para la vida humana, el desarrollo productivo y los equilibrios ecosistémicos, la gestión y disponibilidad del agua es hoy vital para evitar la propagación del virus responsable del COVID-19 y restablecer la salud pública, pues el lavado de manos, la desinfección de alimentos y superficies son parte de las medidas básicas de prevención.

para las necesidades del país es alta en la mayoría de sus territorios. Estos problemas se agudizan con la falta de adecuados acceso y uso a agua para consumo humano. Según cifras de la ONU (UN News, 2020b) el problema es global, pues “2200 millones de personas carecen de agua potable y 4200 millones, el 55% de la población mundial, carecen de un sistema de saneamiento adecuado.” En el caso de América Latina, existen 37 millones de personas sin acceso a los servicios de agua potable (ACNUDH, 2020), y esta cifra aumenta por problemas relacionados tanto al cambio climático, como sequías e inundaciones, la expansión de la agricultura industrial, pero también, por la dependencia económica a un sistema productivo centrado en la extracción de recursos naturales sin considerar el impacto medioambiental. La figura 2 más abajo muestra el porcentaje de población en los países de América Latina con acceso a servicios de saneamiento “al menos básico” según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, agua para uso y consumo humano, manejo de aguas residuales y excretas, y disposición de residuos sólidos. Estos indicadores reflejan las diversas tensiones en relación al recurso hídrico en la región.

Las desigualdades entre los países se replican dentro de cada uno, con territorios rezagados en términos socioeconómicos y ambientales. Con la pandemia, estas brechas arrastradas desde hace décadas -cuya urgencia por resolver el COVID-19 ha evidenciado- la desigual disponibilidad del recurso hídrico en vastas comunidades Latinoamericanas se ha vuelto doblemente crítica. Además de ser clave para la vida humana, el desarrollo productivo y los equilibrios ecosistémicos, la gestión y disponibilidad del agua es hoy vital para evitar la propagación del virus responsable del COVID-19 y restablecer la salud pública, pues el lavado de manos, la desinfección de alimentos y superficies son parte de las medidas básicas de prevención.

Figura 2. Nivel de acceso a servicios básicos de saneamiento

Mapa: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Fuente: Pan American Health Organization (PAHO).

La investigación sobre coaliciones territoriales es un aporte en el debate de política pública sobre bienestar, recursos naturales y cambio climático.

Recurso hídrico y conflictos en Latinoamérica

Las tensiones y contradicciones en la asignación y gestión del agua, que se intensifican debido a la presión sobre los sistemas hídricos que trae consigo el cambio climático, han llevado a la multiplicación de conflictos socioambientales ligados al agua (Gleick, 2019). Por ejemplo, el sitio web Environmental Justice Atlas identifica más de 650 conflictos vinculados al agua, que equivalen al 20% del total de conflictos socioambientales reportados. De ellos, el 31% (201) ocurren en la región. La figura 4 muestra la distribución de los conflictos en Latinoamérica.

Figura 3. Mapa de conflictos asociados al agua en Latinoamérica

Fuente: Environmental Justice Atlas. Extraído el 17/06/2020 filtrando conflictos asociados a proyectos vinculados al recurso hídrico situados en las regiones de Sudamérica, Mesoamérica y el Caribe.

Ante la privatización, mercantilización, y acaparamiento del agua, escenarios de escasez y competencia por usos alternativos, el desafío de gestionar el recurso hídrico tiene desafíos a nivel político y social de la gobernanza de este recurso. Si estos componentes no son abordados, cualquier proceso de identificación de problemas y soluciones tecnológicas puede ser inconducente. Gordillo, retomando el planteamiento del Panel Independiente sobre la Agricultura para el Desarrollo de América Latina (PIADAL), releva la importancia de "reconocer que el motor de cambio en la política rural, debe ser político y no solamente técnico" (2019, p. 4). Este punto se vuelve evidente en territorios con presencia de conflictos, pues la probabilidad de desarrollar resiliencia en los sistemas hídricos es muy baja.

Los conflictos relacionados a los recursos hídricos se encuentran entramados en múltiples dinámicas territoriales. La investigación realizada en las áreas de movimientos sociales y desarrollo territorial muestran que algunas de ellas son las disputas por la legislación vigente que regula su uso, reglas informales en torno al uso tradicional, la matriz de desarrollo productivo en el territorio, entre otras (Bebbington, 2011; Bebbington et al., 2016; Berdegué et al., 2015; Buschmann et al., 2009; Gleick, 2019). Por ejemplo, en el secano de O'Higgins, Chile, se formó una coalición donde participantes de organismos públicos y pequeños agricultores impulsaron cambios en los derechos de propiedad sobre el agua subterránea para consumo humano y riego. El trabajo de diálogo generó efectos positivos en inclusión social, pero agravó el impacto ecológico por la explotación excesiva de las napas subterráneas porque no se incluyó en el diálogo a grupos preocupados por el balance ecológico y la biodiversidad (Berdegué & Modrego, 2012). Por tanto, las soluciones a los problemas relacionados a estos conflictos pasan por profundizar en esas redes de interrelación e interdependencia.

En ese contexto, la investigación sobre coaliciones territoriales de Rimisp es un aporte en el debate de política pública sobre bienestar, recursos naturales y cambio climático, particularmente en Latinoamérica, donde esta ecuación está también atravesada por un paisaje de conflictos territoriales vinculados al agua, como visto en las figuras anteriores.

Coaliciones territoriales y su rol en la gestión de conflictos asociados al recurso hídrico

Aunque en términos macro y espacio-temporales la crisis sanitaria del COVID-19 sea global, la profundidad y naturaleza de sus costos varían según las particularidades de cada territorio: dotación de agua, infraestructura sanitaria y hospitalaria, dinámicas de producción, distribución y consumo de alimentos y densidad del tejido social, por ejemplo, varían de territorio en territorio y son determinantes de cuán exitosas sean las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. La existencia de coaliciones con características que habilitan su potencial transformador es una de las variables que inciden en acuerdos de desarrollo territorial en general, y específicamente para el tema de conflictos hídricos, pueden impactar en cuan resilientes son los territorios ante eventos como el COVID-19, en la medida que aportan a gestionarlos a favor del desarrollo de sus habitantes.

Las coaliciones transformadoras se componen de actores pertenecientes a diversos sectores e intereses (a veces contrapuestos), que realizan acciones concertadas en torno a una dinámica y visión compartida territorial de desarrollo en un horizonte de mediano o largo plazo. Estas coaliciones combinan los capitales de sus participantes (que han de estar repartidos de manera tal que ninguno esté subordinado a los demás en todas las dimensiones de incidencia) permitiendo el diálogo para generar cambios en el territorio (Fernández y Asensio, 2014).

No todas las coaliciones tienen el potencial de aportar al desarrollo inclusivo de sus territorios algunas, al contrario, contribuyen a la generación de trampas que reproducen la pobreza y desigualdad (Bebbington, Escobal, Soloaga and Tomaselli 2017).

Muchas veces, aunque exista la intención de llegar a soluciones, no desarrollar mecanismos de diálogo y no invertir en dinámicas territoriales que estimulen la deliberación en la forma de coaliciones transformadoras puede ser perjudicial.

Un ejemplo de caso en el cual no de desarrolló una coalición de carácter transformador se encuentra el lago Atitlán, Guatemala. Allí se conjugó la contaminación por aguas residuales del agro y los desechos sólidos residenciales y turísticos mal manejados que llevaron a un colapso del ecosistema lacustre. Varios actores territoriales, entre ellos académicos y la cooperación internacional levantaron ProAtitlán, "Proyecto de fortalecimiento del sistema de gestión de desechos en la cuenca del lago de Atitlán", con el objetivo de generar una alianza transversal que lograse un plan de manejo y descontaminación. Sin embargo, a pesar de la creación formal de la alianza, esta nunca se conformó como una coalición conducente a un acuerdo en la visión de desarrollo para solucionar el problema que afectaba a todas y todos. La hegemonía de parte de los actores que acumulaban más poder que el resto, implicó que el impulso inicial de aunar al conjunto de los involucrados para lograr visiones conjuntas no se sostuvo en el tiempo.

En muchos territorios, el gran poder de actores extra-territoriales frente al menor poder de las comunidades y gobiernos locales provoca un quiebre de posibles diálogos.

Parte de los participantes, compuesta por la élite política y económica -miembros de la Asociación de Amigos del Lago Atitlán – impulsaron el proyecto de construir un megacolector de residuos que evitara una nueva crisis, imponiéndose gracias a su capital político, social y económico. "La asociación fue creada por unos sesenta propietarios de chalets a las orillas del lago. Es decir, algunas de las familias más acaudaladas del país. Personas con contactos y amigos suficientes como para tener acceso directo a ministros y presidentes; incluida la responsable del lago" (Plaza Pública, 2020). Otros grupos protestaron, tales como las y los indígenas de Sololá, a quienes no se le respetó su derecho a consulta previa. Más allá del caso particular, la instalación de una desconfianza por años de proyectos cuyos beneficios aumentan el clivaje socioeconómico y costos se socializan entre los más vulnerables dificulta la formación de coaliciones inclusivas.

Un eje esencial del trabajo de las coaliciones es que logren generar instancias de diálogo donde las personas puedan negociar y encontrar soluciones conjuntas a los temas que los convocan. Este ejercicio no es trivial y enfrenta múltiples desafíos, entre ellos, grandes asimetrías de poder e información, alta polarización, dificultad para manejar la evidencia científica, disputas en las visiones de desarrollo, valores, morales e ideológicas, y baja capacidad institucional para generar arreglos y cambios, entre otras (Martin y Justo, 2015). En el caso de las instancias de diálogo más utilizadas en contextos de conflictos se encuentran: (i) La consulta previa; (ii) Las mesas de desarrollo; (iii) Mesas de diálogo; (iv) Mesas técnicas y grupos de trabajo. Estas instancias, en la práctica, aún no son utilizadas tan frecuentemente ni tampoco funcionan en todos los casos de manera efectiva para contribuir a los procesos de cambio institucional (Álvarez y Castillo 2020).

La existencia de coaliciones con características que habilitan su potencial transformador es una de las variables que inciden en acuerdos de desarrollo territorial en general, y específicamente para el tema de conflictos hídricos, pueden impactar en cuan resilientes son los territorios ante eventos como el COVID-19, en la medida que aportan a gestionarlos a favor del desarrollo de sus habitantes.

Uno de los límites de las coaliciones o, si se quiere, una de las condiciones necesarias -pero escasamente dadas- para que alcancen su potencial transformador, es que requieren una distribución de los capitales o poderes (político, social, cultural) tal que ninguno de los actores esté por debajo de otro(s) en todas las dimensiones. En muchos territorios, el gran poder de actores extra-territoriales frente al menor poder de las comunidades y gobiernos locales provoca un quiebre de posibles diálogos. El ejemplo de Atitlán es uno, pero también se da cuando existen megaproyectos dirigidos por multinacionales vinculados a la extracción de recursos naturales que, apoyadas por los gobiernos de países que las reciben, logran la dominancia en la toma de decisiones regulatorias y territoriales, desarticulando espacios de construcción de acuerdos.

En los distritos de Tapayrihua y Pocohuanca, por ejemplo, se contaminaron las fuentes de agua (además de otros problemas tales como deslizamientos de tierra y afectación de zonas de interés arqueológico) fruto la exploración del proyecto Los Chancas Copper Mining en Aymaraes, perteneciente a Southern Perú Copper Corporation (SPCC). Dentro de las negociaciones se incluyó una "mesa de trabajo para el desarrollo" que sesionó durante tres años (Álvarez y Castillo, 2020). Sin embargo, el proyecto siguió su curso, así como el uso y contaminación del agua. A pesar de que el diálogo se centró en la búsqueda de soluciones a los problemas que emergieron entre la comunidad y la empresa, no hubo concesiones ni negociaciones en la dinámica de diálogo y, por tanto, se agotaron las posibilidades de cambio o manejo del conflicto con este mecanismo. La desigual distribución del poder económico, se traduce en capturas del poder político e institucional, y es otro de los topes que impide se dé la condición de que ningún actor supere a las y los otros en toda dimensión de capitales.

El virus golpea más fuertemente a poblaciones vulneradas en sus derechos, como por ejemplo aquellas que no gozan del derecho al agua.

Sin embargo, entramados que habilitan la formación y evolución exitosa de coaliciones transformadoras, con capitales distribuidos entre los actores también existen. Es el caso de la coalición transformadora de Tungurahua, Ecuador. Analizando esta coalición, Ospina y Hollenstein (2015, p.6) destacan la importancia de la historia que condujo a una relativamente equitativa distribución del acceso al agua y la tierra. Tras un proceso redistributivo de dichos recursos, los campesinos de Tungurahua lograron poner límite a las presiones por concentrar el recurso hídrico y de tierras. Esto contribuyó al resultado virtuoso de crecimiento e inclusión en este territorio. Adicionalmente, los minifundios consiguieron acceso a una red de mercados rural-urbanos para comercializar sus productos, evitando así asimetrías en el poder de mercado que ocurre cuando los intermediarios se comportan como oligopsonios*. Esta estructura menos desigual permitió que los actores territoriales eventualmente se consolidaran como coalición reflexiva y coordinada. Llevada al contexto actual, el enfoque territorial de coaliciones transformadoras sugiere que los acuerdos de gobernanza emanados o fortalecidos dejan a los habitantes de territorios como Tungurahua mejor preparados para enfrentar eventos climáticos - y ahora también sanitarios, pues el virus golpea más fuertemente a poblaciones vulneradas en sus derechos, como por ejemplo aquellas que no gozan del derecho al agua.

Existen casos donde el diálogo sobrepasa la discusión de un conflicto puntual, expandiéndose a las dinámicas territoriales que subyacen a la disputa inicial. Por ejemplo, en la presa Villa Victoria, parte del sistema de Cutzamala en México, producto de disputas en el marco de la oposición a diversos mega proyectos se organizó una mesa de desarrollo amplia. Dentro de los actores convocados, se encontraban las mujeres indígenas agricultoras de Mazahuas, quienes sufrieron la inundación de 300 hectáreas de sus cultivos y la falta de abastecimiento de agua potable. La demanda inmediata de las mujeres a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) era de compensación, pero a través de su participación en la mesa lograron varias mejoras en el marco de un plan de desarrollo sostenible para sus territorios. Entre ellas, los pagos compensatorios e instalación de redes hidráulicas para el poblado y así acceder a agua potable (Gómez, 2010). La participación en el diálogo de las mujeres mazahuas estuvo acompañada por medidas de presión y fortalecimiento de su propia organización, así como de la participación de distintos niveles de gobierno y actores relevantes en el desarrollo de esa localidad. Todos estos componentes, propiciaron que se llegaran a acuerdos y avances para ese territorio en ese momento en el tiempo.

Cuando los afectados no legitiman el diseño existente de las reglas y condiciones que se aplican para resolver un asunto relacionado al agua, el territorio es propicio al conflicto. Allí radica la importancia de los procesos participativos inclusivos y transparentes. Aquellas experiencias de diálogos en los cuales se producen transformaciones, son aquellas que se ajustan a sus territorios, se cumplen las reglas y se dan los espacios para que esto ocurra por un periodo largo de tiempo. En estos casos las y los involucrados

están dispuestos a hacer cambios graduales tanto en las dinámicas productivas, las instituciones formales, así como en el comportamiento de los actores. El caso de los conflictos ligados a recursos hídricos esto es aún más acuciante ya que no solo es parte fundamental del desarrollo humano y de todo ser vivo, sino que también de la vida en el planeta. Entonces, las coaliciones transformadoras son centrales en las dinámicas virtuosas que estimulan la disminución de la pobreza y desigualdad. Al mismo tiempo, inciden en la gestión de los recursos naturales y su sustentabilidad (Fernández, Hernández, Trivelli y Schejtman 2012).

Comentarios finales

Las crisis sanitaria y económica vinculadas al COVID-19 agudizan los conflictos por los recursos naturales. Sin embargo, estos desafíos serán aún más intensos año a año por los efectos del cambio climático. Los países de América Latina estamos expuestos por la extrema desigualdad y pobreza que aún se observa en la sociedad y sus territorios, y por el estrés hídrico de muchos sectores rurales en la región. Más aún, la creciente pérdida de vidas humanas por la pandemia pone de manifiesto que lograr dinámicas de desarrollo inclusivas es necesario para evitar el efecto desproporcionado en territorios y comunidades excluidas. A través de inclusión, es posible contribuir a generar sociedades y sistemas más resilientes ante los desafíos climáticos y sanitarios de este siglo.

En este contexto, es importante que los esfuerzos para mejorar el acceso y uso del agua vayan acompañados de acciones de mitigación climática y de acuerdos que sean frutos de dinámicas territoriales deliberativas elaboradas por los mismos actores

* Situación que ocurre cuando hay pocos compradores (demanda) en relación a los vendedores o productores (oferta), tal que los primeros tienen un poder de mercado que les permite influir en el precio, que termina siendo más bajo, afectando negativamente a los oferentes y generando rentas para los demandantes.

afectados por las tensiones en el territorio. En este aspecto, las instancias participativas otorgan legitimidad a los procesos y promueven un desarrollo inclusivo. En particular, la investigación de las últimas décadas de Rimisp sugiere que las coaliciones transformadoras son un aporte importante para solucionar o manejar conflictos porque proveen de oportunidades para generar cambios en la matriz productiva y los acuerdos institucionales que, a su vez, inciden hacia la búsqueda de una relación más armónica entre el desarrollo del ser humano con el agua y la tierra.

En este sentido, se necesita con urgencia políticas públicas que promuevan las condiciones para generar espacios de diálogo y empoderar a los ya existentes. Así, es posible avanzar hacia garantías de asignación y uso equitativo de este recurso, tanto en respuesta al COVID-19 como para gestionar de manera sostenible el agua con énfasis en asegurar su acceso para quienes más lo necesiten.

A propósito del rol del agua en el combate contra la propagación del coronavirus y del desigual acceso a este recurso, hemos reflexionado sobre las relaciones entre desigualdad, cambio climático, recursos hídricos y conflictos en Latinoamérica. Entendiendo que cada uno de estos conceptos y relaciones es objeto de investigación por sí solo, el prisma teórico-práctico de coaliciones transformadoras aporta en cuanto propone políticas basadas en la evidencia, para abordar los conflictos que se generan ante el cambio climático, la distribución de recursos y los intereses divergentes de los actores en cada territorio. De este análisis surgen interrogantes e hipótesis, ¿los territorios con coaliciones transformadoras instaladas están teniendo un rol en la gestión de la crisis sanitaria? ¿Las medidas adoptadas por la política pública durante la pandemia, nutridas por la incidencia de coaliciones territoriales, impactan su desempeño relativo?

Lo que está en juego dentro del trabajo de coaliciones es el bienestar de las personas, la seguridad energética, alimentaria y la conservación (o destrucción) de los equilibrios medioambientales. Naciones Unidas Agua releva el carácter ganar-ganar de enfrentar la gestión de este recurso con el doble objetivo de mitigar y adaptarse al cambio climático porque fortalece su vital provisión y al mismo tiempo combate causas y efectos del cambio climático (UN-Water, 2020). Y con ello, se disminuyen los riesgos ante crisis, desastres y eventos extremos - o como bien vemos ahora, ante crisis sanitarias y económicas como la del COVID-19.

Autores

Daniela García – Investigadora Principal de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Lola Hiernaux – Investigadora de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Referencias

ACNUDH (2020, marzo 23). No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad – Expertos ONU. https://acnudh.org/no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-proporcionar-agua-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-expertos-onu/

Álvarez, S. y Castillo, K. (2020). Estrategias colaborativas para el abordaje de conflictos: espacios de diálogo en México, Perú, Colombia y Guatemala, serie documentos de trabajo N° 263. Rimisp Santiago Chile.

Bebbington, A. (2011). Social Conflict, Economic Development and the Extractive Industry: Evidence from South America. Routledge.

Bebbington, A., Escobal J. E., Soloaga, I., & Tomaselli, A. (2016). Trampas territoriales de pobreza, desigualdad y baja movilidad social: Los casos de Chile, México y Perú. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Bebbington, T., Escobal, J., Soloaga, I., Tomaselli, A. (2017). Poverty, inequality and low social mobility: Territorial traps in Chile, Mexico and Peru. Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Rimisp, Universidad Iberoamericana.

Berdegué, J. A., Escobal, J., & Bebbington, A. (2015). Explaining Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions, and Coalitions. World Development, 73, 129-137. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.018

Berdegué, J. A., & Modrego, F. (2012). De Yucatán a Chiloé: Dinámicas territoriales en América Latina. Teseo. Buenos Aires, Argentina.

Bond, A. J., Morrison-Saunders, A., Retief, F. P., & Doelle, M. (2020). Environmental regulations likely to be first casualties in post-pandemic recovery. The Conversation.

Brunet, R. (2020, abril 25). Covid-19: ¿se sacrificará la ecología en nombre de la reactivación económica?. France24. https://www.france24.com/es/20200424-ecologia-medio-ambiente-reactivacion-economia-covid-19

CEPAL. (2019). Panorama Social de América Latina 2019. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019

Fernández, M.I. y Asensio, R. (coords.) (2014) ¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina. Lima: IEP.

Fernández, M.I.; Asensio, R.; Trivelli, C y Schejtman, A. (2012). Coaliciones Sociales Transformadoras y Desarrollo Rural Inclusivo. Serie claves para el desarrollo territorial. Santiago Chile: Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

EEA. (2020). Water stress. European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/archived/archived-content-water-topic/wise-help-centre/glossary-definitions/water-stress

Gleick, P. H. (2019). Water as a Weapon and Casualty of Conflict: Freshwater and International Humanitarian Law. Water Resources Management, 33(5), 1737-1751. https://doi.org/10.1007/s11269-019-02212-

Gómez Anahí (2010), Agua y desigualdad social. El caso de las indígenas mazahuas en México, Catarata, UNESCO-Etxea. México.

Gordillo, G. (2019) Cooperación y conflicto: actores, coaliciones. 2030 - Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, No. 30. Santiago de Chile. FAO.

Martin y Justo (2015). Análisis, prevención y resolución de conflictos por el agua en América Latina y el Caribe. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago, Chile.

Ospina Peralta, P. y Hollenstein, P. (2015). Coaliciones territoriales y dinámicas rurales en Ecuador: por qué la historia importa. Serie documento de trabajo N° 170. Grupo de trabajo Cohesión Territorial para el Desarrollo. Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Rimisp, Santiago, Chile.

Rimisp (2018). Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad 2017. Rimisp – Centro Latinoamericano para el desarrollo rural. Santiago, Chile.

UN-Water (2020). United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change, Paris, UNESCO.

UN News (2020a, marzo 10). El cambio climático es más mortal que el coronavirus. https://news.un.org/es/story/2020/03/1470901

UN News (2020b, marzo 22) El agua es parte del problema, pero también de la solución ante el cambio climático. https://news.un.org/es/story/2020/03/1471492